



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA



12 SEP 2024

OFICIAL DE PARTES DE LA
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA

FOJAS: *Tres útiles en original*
ANEXOS: *Escrito original en seis
hojas útiles en dos tantos.*



OIC IEE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

Despacho de la Titular del Órgano Interno de Control

Oficio: IEE-OIC-45/2024

Chihuahua, Ch., a 11 de septiembre de 2024

Asunto: Atención de solicitud de acceso
a la información folio
080159324000181.

Nancy Ivone Ruelas Nevárez
**Titular de la Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua**

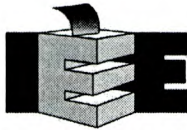
Hago referencia a su interoficio I-IEE-UTAIPDP-194/2024, por medio del cual informo que, con fecha veintisiete de agosto del dos mil veinticuatro, se recibió por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la solicitud de acceso a la información pública con folio 080159324000181, en la que se requirió al Sujeto Obligado Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, lo siguiente:

"...1. ¿Existe o existieron casos en que se hayan substanciado procedimientos administrativos sancionadores en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios en contra de particulares (proveedores, postores, licitantes), en caso afirmativo, cual ha sido la resolución? Y proporcionar la resolución correspondiente. 2. Se han instaurado procedimientos sancionadores en contra de particulares?, en caso afirmativo cuál ha sido su resolución? Y proporcionar la resolución correspondiente. 3. En caso de que se hayan instaurado procedimientos administrativos sancionadores en contra de particulares, mencionar si han realizado alguna manifestación respecto a la vulneración del principio non bis idem en su perjuicio?...."

Sobre el particular, dado que la solicitud de información no precisa temporalidad, debe entenderse que se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud; esto es, a partir del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés a la fecha de la solicitud, conforme al criterio 03/19 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que a la letra dice:

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Avenida Universidad, número 2757, Colonia San Felipe I, C.P. 31203, Chihuahua, Chihuahua, (614) 4 32 19
80 ext. 2500



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA



OIC IEE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

Despacho de la Titular del Órgano Interno de Control

“Periodo de búsqueda de la información. En el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo respecto del cual requiere la información, o bien, de la solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan identificarlo, deberá considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud.

Precedentes:

Acceso a la información pública. RRA 0022/17. Sesión del 16 de febrero de 2017. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas.

Acceso a la información pública. RRA 2536/17. Sesión del 07 de junio de 2017. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Secretaría de Gobernación. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.

Acceso a la información pública. RRA 3482/17. Sesión del 02 de agosto de 2017. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.”

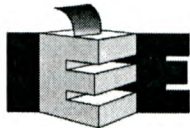
De la misma forma, no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, conforme al criterio 03/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que refiere:

“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. Precedentes:

Acceso a la información pública. RRA 0050/16. Sesión del 13 julio de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas.

“2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua”

Avenida Universidad, número 2757, Colonia San Felipe I, C.P. 31203, Chihuahua, Chihuahua, (614) 4 32 19
80 ext. 2500



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA



OIC IEE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

Despacho de la Titular del Órgano Interno de Control

Acceso a la información pública. RRA 0310/16. Sesión del 10 de agosto de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.

Acceso a la información pública. RRA 1889/16. Sesión del 05 de octubre de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora."

En ese contexto, durante el periodo a informar, respecto a la pregunta marcada con el numeral 1, sí se han substanciado procedimientos administrativos por presuntas infracciones a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en los cuales se han emitido las resoluciones que en derecho corresponden, las cuales no pueden entregarse al formar parte de procedimientos administrativos que no han causado estado, que constituye información reservada en los términos del acuerdo de clasificación que se adjunta al presente recurso.

Referente a la pregunta marcada con el numeral 2, en el periodo a informar sí se han instaurado procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de particulares; sin embargo, las resoluciones que son objeto de la solicitud de información, son resultado de un proceso deliberativo que emite la autoridad resolutora, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209, fracciones IV y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que disponen:

*"Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o **Faltas de particulares**, se deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo.*

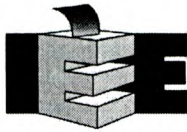
Las Autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a VII del artículo anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones:

(...)

*IV. Una vez transcurrido el periodo de alegatos, **el Tribunal, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles**, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles*

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Avenida Universidad, número 2757, Colonia San Felipe I, C.P. 31203, Chihuahua, Chihuahua, (614) 4 32 19 80 ext. 2500



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA



OIC IEE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

Despacho de la Titular del Órgano Interno de Control

más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera debiendo expresar los motivos para ello, y"

En ese tenor, de acuerdo a las disposiciones antes mencionadas, no es una facultad del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral, contar dentro de sus archivos con las resoluciones que ponen fin a los procedimientos administrativos de responsabilidad contra particulares, y respecto de las cuales no se ha tenido conocimiento de que se haya emitido alguna, por lo que la cantidad de resoluciones con las que se cuente sobre tales asuntos es igual a cero. De ahí que resulte innecesario una declaración formal de inexistencia. Tiene aplicación el criterio 014/2023, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que indica:

"Ejercicio del derecho de Acceso a la Información. Respuesta igual a cero, no es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico y el resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior, el número cero es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo.

Precedentes originales:

Acceso a la información pública. 4301/11. Sesión del 11 de octubre de 2011. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Comisionada Ponente Sigrid Arzú Colunga.

Acceso a la información pública. RDA 2111/12. Sesión del 11 de julio de 2012. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Presidencia de la República. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.

Acceso a la información pública. RDA 4451/12. Sesión del 23 de enero de 2013. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.

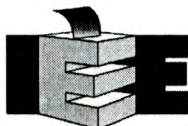
Acceso a la información pública. RDA 0455/13. Sesión del 17 de abril de 2013. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Instituto Nacional de Migración. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar.

Acceso a la información pública. RDA 2238/13. Sesión del 19 de junio de 2013. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Procuraduría General de la República. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.

De la misma manera, cabe citar el criterio 07/2017, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que indica:

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Avenida Universidad, número 2757, Colonia San Felipe I, C.P. 31203, Chihuahua, Chihuahua, (614) 4 32 19
80 ext. 2500



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA



OIC IEE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

Despacho de la Titular del Órgano Interno de Control

"Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.

Precedentes:

- Acceso a la información pública. RRA 2959/16. Sesión del 23 de noviembre de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Secretaría de Gobernación. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
- Acceso a la información pública. RRA 3186/16. Sesión del 13 de diciembre de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Petróleos Mexicanos. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas.
- Acceso a la información pública. RRA 4216/16. Sesión del 05 de enero de 2017. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Cámara de Diputados. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana."

En lo que atañe a la pregunta marcada con el numeral 3, no es posible brindar información sobre el contenido de las defensas de los particulares, acerca de que hayan argumentado la vulneración del principio non bis ídem en su perjuicio, ya que implicaría desvelar el contenido de las constancias de los procedimientos administrativos que no han causado estado, que constituye información reservada en los términos del acuerdo de clasificación que se anexa al presente oficio.

Atentamente

**Mtra. Carmen Lorena Torres Orozco
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua**



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Avenida Universidad, número 2757, Colonia San Felipe I, C.P. 31203, Chihuahua, Chihuahua, (614) 4 32 19
80 ext. 2500



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

ACUERDO POR EL CUAL EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA APRUEBA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA RELATIVA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN FOLIO 080159324000181, A PETICIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE ESTE MISMO SUJETO OBLIGADO, QUE SE DA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, INTEGRADO EN ESTA SESIÓN POR SU PRESIDENTA MARÍA GUADALUPE DELGADO COTA Y POR PAOLA CONTESTABILE FRAYRE EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA; REUNIDO EN SUS INSTALACIONES UBICADAS EN LA AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE No. 2104, COLONIA ALTAVISTA, CÓDIGO POSTAL 31200, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S:

PRIMERO.- En fecha 27 de agosto de 2024 se recibió en la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de este Sujeto Obligado y por conducto de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la solicitud de acceso a la información pública con folio 080159324000181, misma que se tiene por reproducida en este apartado como si se insertara a la letra, en obvio de repeticiones y para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO.- De igual manera, con fecha 28 del mismo mes y año, la mencionada Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, remitió Interoficio I-IEE-UTAIPDP-194/2024 al Órgano Interno de Control de este mismo Sujeto Obligado por medio del cual y con fundamento en los artículos 52 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, a efecto de que diera respuesta a la solicitud antes descrita.

TERCERO.- Con fecha 06 de septiembre de 2024 y por conducto de Oficialía de Partes de este Sujeto Obligado, fue recibido por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Oficio IEE-OIC-043/2024 remitido por parte de CARMEN LORENA TORRES OROZCO en su carácter de Titular de dicho Órgano Interno de Control de este mismo organismo comicial, por medio del cual solicita ampliación de plazo de respuesta a solicitud de acceso a la información pública folio 080159324000181.

CUARTO.- Por último, con fecha 12 de septiembre del 2024 y por conducto de Oficialía de Partes de este Sujeto Obligado, el Órgano Interno de Control dio respuesta a la solicitud de información antes mencionada, por medio de la cual clasifica como reservada la información relativa a la solicitud de acceso a la información folio 080159324000181, mismo que se somete a este Comité de Transparencia de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, con la finalidad de que se resuelva sobre la mencionada clasificación de información, mismo que a la letra dice:

Chihuahua, Ch., a 11 de septiembre de 2024
Asunto: Se clasifica como reservada la información relativa a la solicitud de acceso a la información folio 080159324000181.



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

NANCY IVONE RUELAS NEVÁREZ
Titular de la Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha veintisiete de agosto del dos mil veinticuatro, se recibió por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la solicitud de acceso a la información pública con folio 080159324000181, en la que se requirió al Sujeto Obligado Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, lo siguiente:

"...1. ¿Existe o existieron casos en que se hayan substanciado procedimientos administrativos sancionadores en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios en contra de particulares (proveedores, postores, licitantes), en caso afirmativo, cual ha sido la resolución? Y proporcionar la resolución correspondiente. 2. Se han instaurado procedimientos sancionadores en contra de particulares?, en caso afirmativo cuál ha sido su resolución? Y proporcionar la resolución correspondiente. 3. En caso de que se hayan instaurado procedimientos administrativos sancionadores en contra de particulares, mencionar si han realizado alguna manifestación respecto a la vulneración del principio non bis idem en su perjuicio?...."

2.- Con fecha veintiocho de agosto del mismo año, la Lic. Nancy Ivone Ruelas Nevárez, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, remitió a este Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el Interoficio I-IEE-UTAIPDP-194/2024, por medio del cual turnó dicha solicitud de información, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

3.- Que este Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, considera que la información solicitada, debe ser clasificada como reservada, por los siguientes motivos:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 106 fracción I, establece que la clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba una solicitud de información, situación que en la especie así ocurre, al haberse recibido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la solicitud de información con folio 080159324000181; de igual manera, en su artículo 113, fracción X de la Ley General que establece debe reservarse aquella información cuya publicación vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, situación que de igual manera acontece, pues estamos ante documentos que forman parte dentro de expedientes administrativos que aún no han causado estado.

SEGUNDO.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua en su artículo 117 fracción I, prevé que la clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba una solicitud de acceso a la información, situación que en la especie así ocurrió al haberse recibido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la solicitud de información con folio 080159324000181; asimismo, el artículo 124 en su fracción X, establece que podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación vulnere la formación y trámite de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, situaciones que también se cumplen a cabalidad, puesto que estamos ante documentos que forman parte dentro de expedientes de responsabilidad administrativa que aún no han causado estado; por ende, es de acordarse y se:-----

ACUERDA:

I.- De todo lo anteriormente narrado, se desprende con claridad que nos encontramos dentro de las hipótesis que las leyes de la materia nos marcan para estar en condiciones de clasificar como reservada la información que se pide en la solicitud recibida por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, con fecha veintitrés de agosto del dos mil veinticuatro, bajo el folio 080159324000181, toda vez que este Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, no está en condiciones de proporcionar la información solicitada por tratarse de información que surge de constancias procesales dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa en trámite, cuya conducción podría resultar afectada al darse a conocer la información que obra en los mismos.



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

Lo anterior, porque si bien el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, buscar y recibir información; también es cierto que tal derecho se encuentra excepcionalmente limitado, cuando existan razones en los términos que las propias leyes disponen.

En ese tenor, si bien en el Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, se han substanciado procedimientos administrativos sancionadores conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, algunos continúan en trámite, sin que pueda hacerse público el contenido de sus constancias, incluyendo desvelar si se han hecho valer manifestaciones respecto a la vulneración del principio non bis idem en su perjuicio, en principio, porque durante la substanciación de un procedimiento, el contenido de las constancias que los conforman sólo atañen a las partes y a la autoridad resolutoria, quien debe velar siempre por el correcto equilibrio del proceso, evitando cualquier injerencia externa, por mínima que sea y suponga una alteración a ese esquema y a la objetividad que rige su actuación.

De la misma forma, la reserva de la información en el caso que nos ocupa, obedece a que publicar información privada esgrimida en ejercicio del derecho de audiencia y parte de la estrategia defensiva de los justiciables, afectaría la valoración que debe ser objeto de la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo, e incluso trascienda a las instancias jurisdiccionales subsiguientes, y por lo cual, su publicidad vulnera justamente la conducción de tales procedimientos administrativos al tener como riesgo la alteración de diversos derechos dentro del proceso, hacia el interior (para las partes y su situación en el proceso), fundamentalmente para quien promueve dentro de los procedimientos administrativos y hacia el exterior (para la continuidad de ese proceso en las instancias subsiguientes en tanto no ha causado estado); lo que desde luego actualiza la causal de reserva de la información prevista en el artículo 124, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, que dispone:

"ARTÍCULO 124. Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación:

X. Vulnere la formación y trámite de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado..."

Lo resaltado es de esta autoridad

En seguimiento a lo anterior, es que la información solicitada conforma un conjunto de documentos relacionados con procedimientos administrativos sancionadores que debe considerarse reservada, en virtud de colmar la hipótesis prevista en el artículo 124, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, toda vez que existen procedimientos de responsabilidad administrativa habiendo previsión expresa en el sentido de que serán públicos la información de tales constancias (Expediente de Investigación, acuerdo de inicio, acuerdos de trámite, diligencias de comparecencia, actas de notificaciones, de audiencia, escritos de las partes, pruebas de las partes, alegatos, resoluciones, recursos en sede administrativa, demandas ante los órganos jurisdiccionales, informes de justificación, etc), hasta en tanto causen estado, porque el ciudadano al tener acceso a información pública podría divulgar libremente sin control la misma, sin esperar a que la información cause estado, a diferencia de la información que se entrega a otras autoridades que solamente la usan para fines de sus atribuciones, y no para el libre conocimiento, por lo que su entrega pública sin que cause estado afecta la formación de los expedientes de los que deriva la documentación solicitada, por ende, para que prevalezca el Estado de Derecho, es necesario que se cumpla con las disposiciones que prevén los procedimientos y derechos, otorgando seguridad jurídica y certeza a quienes están sujetos a ellos, por lo que se realizan en beneficio de la sociedad, y el que se reserven las constancias que los integren hasta que causen estado, otorga esa seguridad pública y certeza de que la información que se haga pública, no podrá ser revocada o modificada.

Tiene aplicación por analogía, la Tesis P. II/2019 (10a.) de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, visible en la página 561, que a la letra indica:

"DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RELACIÓN CON SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES NO DEBE PLANTEARSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS. La clasificación de la información como reservada corresponde al desarrollo del límite previsto en el artículo 6o. constitucional referente a la protección del interés público, mientras que la categoría de información confidencial responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos personales. Desde esta perspectiva, resulta necesario entender que la relación entre el derecho a la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, en la medida en que la natural tensión que pueda existir entre ellos, requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el ejercicio efectivo del derecho a la información y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores constitucionales que están instituidos también en beneficio de las personas. Es por ello que si se reconoce que ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

debe igualmente reconocerse que ninguno de sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse en los mismos términos de equilibrio.”

Lo anterior es así, ya que la presunción de inocencia es un principio aplicable al derecho administrativo sancionador con modulaciones, al preverse no adelantar un juicio de culpabilidad a un particular que se encuentre sujeto a un procedimiento administrativo, y menos, hasta que se determine plenamente su responsabilidad, y se le dé el derecho a ejercer su defensa ante los tribunales previamente establecidos, lo que no podría ser efectivo y afectaría tal derecho a presumirse su inocencia, si se ventila la información relacionada al procedimiento, incluyendo la resolución respectiva sin esperar la firmeza a que tiene derecho todo justiciable. Cabe citar al respecto, la Jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.) de la Décima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, visible en la página 41, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.

Contradicción de tesis 200/2013. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 28 de enero de 2014. Mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.”

El artículo 13, fracción V de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, ya disponía de una causal de reserva sobre las constancias procesales y estrategias de defensa en los procedimientos que no hubieran causado estado, al disponer:

“Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda:

*V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, **las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.**”*

Por lo cual, el contenido del artículo 113, fracción X de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 124, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, son una evolución legal de la protección jurídica que deben tener las constancias procesales que integran los procedimientos administrativos que no hayan causado estado y cuya protección jurídica como información reservada obedece a la vulneración que pudiera causarse a la formación y trámite de tales procedimientos administrativos.



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

Es por todo lo antes expuesto, que la presente reserva encuentra su fundamento legal en los artículos 2 último párrafo, 5 fracción XX, 112 fracción I, 124 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como en el criterio 11/10 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Plazo de reserva: A partir de la firma del presente acuerdo y hasta por año y nueve meses o bien hasta el término en el que se emita la determinación de que haya causado estado.

Ahora bien, dicho periodo se establece al considerar que los términos en promedio que se requiere para resolver el recurso de revisión, el juicio contencioso administrativo, el recurso de reconsideración y juicio de amparo sumados, hacen un total de 405 días hábiles, (75 días hábiles para el recurso de revisión, conforme a los artículos 12º, 121, 126 y 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua; 135 días para el juicio contencioso administrativo, conforme a los artículos 14, 18, 19, 55, 56 y 57 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua; recurso de reconsideración 20 días, de acuerdo a los artículos 71, 72 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua; 133 días para el juicio de amparo directo, conforme a los artículos 17, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 y 186 de la Ley de Amparo y 32 días inhábiles además de sábados y domingos en el año 2024 para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa), por lo que considerando que por año se tienen considerados 260 días hábiles en promedio, es que se calcula aproximadamente un año y nueve meses para que cause estado una resolución administrativa, por lo que tal plazo se estima para la reserva de la información.

Tipo de Reserva: Total

Área que genera la Información: Área de Substanciación y Resolución del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Fuente y Archivo donde Radica la Información: Área de Substanciación y Resolución del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

PRUEBA DE DAÑO:

De conformidad con lo establecido por el artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, se establece que:

"Artículo 112. En la aplicación de la prueba de daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.

III. La limitación se ajusta al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio."

I. Referente al primer supuesto, la prueba de daño para clasificar como reservada la información referida y no proporcionarla al solicitante, se sustenta justamente en el hecho de que **la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable, de perjuicio significativo al interés público**, ya que al proporcionar la información que obra en los documentos solicitados, se pueda provocar afectación del cauce de los procedimientos administrativos o procedimientos judiciales que se relacionan con los anteriores, o de una de las partes que forman parte en dichos procedimientos administrativos. En efecto, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de esa información, supera el interés público, ya que al ser el Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que entre sus atribuciones se encuentran el determinar responsabilidad administrativa e imponer sanciones administrativas, es que al proporcionar la información que obra en los documentos en comento, se estaría en el supuesto de causar un daño y/o perjuicio al desarrollo o cauce legal de los procedimientos de administrativos de que se tratan, señalando que en este caso se está aplicando a la excepción de carácter general en la que se está protegiendo un bien de interés público. Y al clasificar como reservada la información solicitada por el peticionario, evidenciamos que su publicación hará más daño que el beneficio que pudiera representar la divulgación.

Aunado a lo anterior, el interés público se ve afectado en tanto la publicación de la información dentro de los procedimientos administrativos sancionadores, seguidos conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, como de aquellos seguidos conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que aún no causan firmeza, porque la divulgación de la información solicitada por el peticionario de la información que se deriva de procedimientos administrativos que no han causado firmeza causaría un perjuicio al interés público de publicar las constancias que por estar sub judice son mutables con afectación a la presunción de inocencia y la seguridad jurídica, incumpliendo normas legales que son de orden e interés público.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, toda vez que, por un lado, tenemos el interés público a la información pública, mientras que, por el otro, se encuentra el perjuicio a la imagen de la persona que haya sido sujeta a un procedimiento administrativo y cuyas manifestaciones y estrategias de defensa, así como las actuaciones y determinaciones que lo integren se encuentra sub judice por no haber causado estado, el cual es mayor. En efecto, debe decirse que el interés público a la información pública por ser permanente y continua puede esperar a que se cumplan los supuestos y límites legales para la publicidad de las constancias de los procedimientos administrativos y sus resoluciones, ya que tal espera a que los procedimientos administrativos causen firmeza, otorga seguridad jurídica y certeza a quienes acceden a la información, por lo que se realizan en beneficio de la sociedad, pues la información que se haga pública, no podrá ser revocada o modificada.

Por otro lado, la divulgación de la información solicitada por el peticionario, al publicitarse genera una afectación a la seguridad jurídica procesal, así como a la imagen de la persona sujeta a procedimiento pues prejuzga sobre su inocencia o responsabilidad porque pese a estar sub judice los procedimientos en que está implicado, se hace una publicidad antes de que cause firmeza el estado legal del procedimiento administrativo sobre la que pesa un cuestionamiento legal, y respecto del cual, no existe certidumbre de su permanencia, por lo que si bien, puede quedar sin sanción en caso de obtener una sentencia favorable o en instancias superiores revocar la resolución que impuso una sanción, resulta afectado irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés público de conocer tales procedimientos que permanece con el tiempo y puede esperar una vez que se cumplan los presupuestos legales correspondientes.

III. La limitación se ajusta al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Atendiendo al test de proporcionalidad debe determinarse si la limitación del ejercicio de un derecho fundamental persigue un fin válido, y en el presente caso, tenemos que el derecho a la información previsto en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene límites a la máxima publicidad con respecto a la protección de información privada y datos personales en los términos que fijen las leyes, por lo que el derecho a tal información queda limitada a la protección de la información confidencial y datos personales que fijen las leyes, en el presente caso, los artículos 113, fracción X de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 124, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, al limitar el acceso a la información y resoluciones de los procedimientos administrativos sancionadores, hasta el momento en que queden firmes con la finalidad de evitar que se afecte y obstruya su legal conducción.

Debe examinarse si (i) **la reserva persigue un fin válido:**

En el caso en concreto, la reserva de la información, persigue un fin válido porque establecen un equilibrio entre el derecho a la información pública, con respecto a la intimidad, el honor, la buena imagen y la presunción de inocencia a que tiene derecho todo gobernado, por lo que la información pública que se entregue a los peticionarios de la información corresponde a determinaciones y actuaciones procesales que no pueden modificarse ni impugnarse.

(ii) **La reserva como medida resulta idónea para satisfacer su propósito:**

Se considera que la restricción de la información pública relativa a las constancias que integran los procedimientos administrativos incluyendo las estrategias defensivas de las partes, hasta que causen estado los procedimientos y las resoluciones emitidas, resulta idónea para satisfacer el derecho al acceso a la información y proteger de manera preventiva los datos personales, y con ello, la intimidad y buena imagen de los servidores públicos hasta que no haya una determinación firme que indique que todas las actuaciones son inamovibles, máxime cuando el propio legislador dispuso posponer la publicidad de la información procesal hasta su firmeza legal.

(iii) **El grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado por la reserva:**

Se considera que el derecho de acceso a la información de las constancias que integran los procedimientos administrativos incluyendo las estrategias defensivas de las partes, hasta que causen estado los procedimientos y las resoluciones emitidas, es mayor a la difusión inmediata, porque busca salvaguardar la seguridad jurídica de los contenidos procesales hasta su resolución firme, salvaguarda los derechos del servidor público implicado, tales como la presunción de inocencia, el honor, la



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

intimidad y la buena imagen, pues la ciudadanía podría generar un juicio a priori por parte de la sociedad, afectando el prestigio y buen nombre de las personas señaladas como presuntos responsables que están combatiendo la determinación presuntiva de responsabilidad. De igual forma, se sustenta este punto bajo el argumento de que esta medida es temporal, pues para el caso de que los procedimientos administrativos causen firmeza, la información se encontrará en un supuesto legal diverso y a disposición de los gobernados; esto es, la afectación es temporal hasta la firmeza de las actuaciones y constancias procesales.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL DOCUMENTO Y/O EXPEDIENTE	TIPO DE RESERVA	INICIO DE RESERVA	RAZONES Y MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN	ÁREA QUE GENERA LA INFORMACIÓN
SAPC-01/2023 SAPC-02/2023 RA-05/2023	TOTAL	27 de agosto de 2024	Por tratarse de información que surge de constancias procesales dentro de procedimientos administrativos sancionadores que no ha causado estado, cuya publicidad vulnera la formación y trámite del proceso administrativo, al afectar la seguridad jurídica de los contenidos procesales hasta su resolución firme, los derechos del servidor público implicado, tales como la presunción de inocencia, el honor, la intimidad y la buena imagen.	Área de Substanciación y Resolución del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua

ACUERDO:

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 6 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 100 al 106 fracción I, 113 fracción X y 114, todos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apartado Séptimo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, Así Como Para la Elaboración de Versiones Públicas; artículo 109 último párrafo, 117 fracción I y 124 fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, se acuerda la RESERVA TOTAL de los expedientes administrativos SAPC-01/2023, SAPC-02/2023 y RA-05/2023, del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Atentamente

Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua

Mtra. Carmen Lorena Torres Orozco

Por lo que con base a lo antes transcrito, es que se somete a consideración de este Comité de Transparencia lo acordado por el Órgano Interno de Control de este Sujeto Obligado, de acuerdo a los siguientes



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es Sujeto Obligado en virtud a lo establecido por el artículo 32 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

SEGUNDO.- El Comité de Transparencia del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es competente para conocer y resolver respecto a la clasificación de información que realicen los titulares de las áreas de este Sujeto Obligado, de conformidad con lo establecido por los artículos del 109 al 117 fracción I, 124 fracción I y 125, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

TERCERO.- Que según el artículo 4 fracción II de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 1 y 5 fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, la información es pública, entendiéndose como tal todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio que los Sujetos Obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; sin embargo, según el artículo 2 último párrafo y 124 fracción I de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, faculta a este Sujeto Obligado a limitar el acceso a la información, puesto que su publicación representa un riesgo real, demostrable e identificable, de perjuicio significativo al interés público, como lo es en el caso que nos ocupa.

CUARTO.- Este Comité de Transparencia del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua considera correcto someter a consideración de quienes integramos este cuerpo colegiado, la determinación tomada por el Órgano Interno de Control de hacer una clasificación de la información, tomando en consideración que el Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, no está en condiciones de proporcionar la información solicitada por tratarse de información que surge de constancias procesales dentro de procedimientos administrativos sancionadores que no ha causado estado y eso conlleva una vulneración de la formación y trámite del proceso administrativo, al afectar la seguridad jurídica de los contenidos procesales hasta su resolución firme, los derechos del servidor público implicado, tales como la presunción de inocencia, el honor, la intimidad y la buena imagen, todo lo anterior de conformidad con los artículos 3, fracción II, 9 fracción VI, inciso a), 10, párrafos primer y tercero, y 90 a 96 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente a partir del diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

QUINTO.- También se estima correcto lo establecido por el Órgano Interno de Control en el sentido de que el artículo 124, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, dispone que podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación vulnere la formación y trámite de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, situaciones que también se cumplen a cabalidad, puesto que estamos ante documentos que forman parte dentro de expedientes de responsabilidad administrativa que aún no han causado estado



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

Ya que si bien es cierto que el derecho de acceso a la información es un derecho humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en diversos tratados internacionales y que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Es de mencionar que el ejercer dicho derecho pro homine, en el caso que nos ocupa resultaría en una afectación a los intereses públicos, pues el divulgar la información contenida en los expedientes, representaría un riesgo a las diligencias efectuadas al momento y a todas aquellas aún pendientes o que se pudieran llegar a realizar, conforme a las líneas de investigación seguidas por el Área de Investigación.

SEXTO.- Que existen razones objetivas y reales que motivan la reserva de la información, toda vez que la información solicitada conforma un conjunto de documentos relacionados con procedimientos administrativos sancionadores que debe considerarse reservada, en virtud de colmar la hipótesis prevista en el artículo 124, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, toda vez que existen procedimientos de responsabilidad administrativa habiendo previsión expresa en el sentido de que serán públicos la información de tales constancias (Expediente de Investigación, acuerdo de inicio, acuerdos de trámite, diligencias de comparecencia, actas de notificaciones, de audiencia, escritos de las partes, pruebas de las partes, alegatos, resoluciones, recursos en sede administrativa, demandas ante los órganos jurisdiccionales, informes de justificación, etc), hasta en tanto causen estado, porque el ciudadano al tener acceso a información pública podría divulgar libremente sin control la misma, sin esperar a que la información cause estado, a diferencia de la información que se entrega a otras autoridades que solamente la usan para fines de sus atribuciones, y no para el libre conocimiento, por lo que su entrega pública sin que cause estado afecta la formación de los expedientes de los que deriva la documentación solicitada, por ende, para que prevalezca el Estado de Derecho, es necesario que se cumpla con las disposiciones que prevén los procedimientos y derechos, otorgando seguridad jurídica y certeza a quienes están sujetos a ellos, por lo que se realizan en beneficio de la sociedad, y el que se reserven las constancias que los integren hasta que causen estado, otorga esa seguridad pública y certeza de que la información que se haga pública, no podrá ser revocada o modificada.

De lo anteriormente descrito, nos podemos percatar que se cumplen a cabalidad los elementos y/o hipótesis que los Lineamientos Generales establecen para estar en condiciones de reservar la información que se solicita en el folio 080159324000181 recibida por este Sujeto Obligado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), ya que se actualiza lo establecido en las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y los Lineamientos, derivado de que se considera que los expedientes de investigación enlistados, deben ser información reservada

EN CUANTO A LA DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:

PRIMERO.- Este Comité de Transparencia del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, considera que efectivamente se desprende con claridad que nos encontramos dentro de las hipótesis que las leyes de la materia nos marcan para estar en condiciones de clasificar como reservada la información que se pide en la solicitud recibida por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, con fecha veintitrés de agosto del dos mil veinticuatro, bajo el folio 080159324000181, toda vez que el Órgano Interno de



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, no está en condiciones de proporcionar la información solicitada por tratarse de información que surge de constancias procesales dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa en trámite, cuya conducción podría resultar afectada al darse a conocer la información que obra en los mismos. Lo anterior, porque si bien el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, buscar y recibir información, también es cierto que tal derecho se encuentra excepcionalmente limitado, cuando existan razones en los términos que las propias leyes disponen. De lo antes expuesto, se colige que si bien el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, buscar y recibir información, también es cierto que tal derecho se encuentra excepcionalmente limitado, cuando existan razones en los términos que las propias leyes disponen.

Bajo ese contexto, es correcta la apreciación del Órgano Interno de Control al mencionar que artículo 124 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, dispone que podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación... **X.** Vulnere la formación y trámite de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.

Este cuerpo colegiado confirma el hecho de que tiene aplicación por analogía, la Tesis P. II/2019 (10a.) de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, visible en la página 561, que a la letra indica:

“DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RELACIÓN CON SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES NO DEBE PLANTEARSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS. *La clasificación de la información como reservada corresponde al desarrollo del límite previsto en el artículo 6o. constitucional referente a la protección del interés público, mientras que la categoría de información confidencial responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos personales. Desde esta perspectiva, resulta necesario entender que la relación entre el derecho a la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, en la medida en que la natural tensión que pueda existir entre ellos, requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el ejercicio efectivo del derecho a la información y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores constitucionales que están instituidos también en beneficio de las personas. Es por ello que si se reconoce que ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse en los mismos términos de equilibrio.”*

Lo anterior es así, ya que, en primer término, la presunción de inocencia es un principio aplicable al derecho administrativo sancionador con modulaciones, al preverse no adelantar un juicio de culpabilidad a un servidor público que se encuentre sujeto a un procedimiento de responsabilidad administrativa, y menos, hasta que se determine plenamente su responsabilidad, y se le dé el derecho



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

a ejercer su defensa ante los tribunales previamente establecidos, lo que no podría ser efectivo y afectaría tal derecho a presumirse su inocencia, si se ventila la información relacionada a los procedimientos sin esperar la resolución definitiva y la firmeza a que tiene derecho todo servidor público. Cabe citar al respecto, la Jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.) de la Décima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, visible en la página 41, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.

Contradicción de tesis 200/2013. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 28 de enero de 2014. Mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.”

Asimismo, es correcta la aplicación del artículo 13, fracción V de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, ya disponía de una causal de reserva sobre las constancias procesales y estrategias de defensa en los procedimientos que no hubieran causado estado, al disponer:

“Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda:

V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.”

Por lo cual, el contenido del artículo 113, fracción X de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 124, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, son una evolución legal de la protección jurídica que deben tener las constancias procesales que integran los procedimientos administrativos que no hayan causado estado y cuya protección jurídica como información reservada obedece a la vulneración que pudiera causarse a la formación y trámite de tales procedimientos administrativos.

SEGUNDO.- EN CUANTO AL PLAZO DE RESERVA:

Se confirma que sea a partir de la firma de dicho acuerdo y hasta por un año y nueve meses o bien hasta el término en el que se emita la determinación de que haya causado estado, ya que dicho periodo se establece al considerar que los términos en promedio que se requiere para resolver el recurso de revisión, el juicio contencioso administrativo, el recurso de reconsideración y juicio de amparo sumados, hacen un total de 405 días hábiles, (75 días hábiles para el recurso de revisión, conforme a los artículos 12º, 121, 126 y 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua; 135 días para el juicio contencioso administrativo, conforme a los artículos 14, 18, 19, 55, 56 y 57 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua; recurso de reconsideración 20 días, de acuerdo a los artículos 71, 72 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua; 133 días para el juicio de amparo directo, conforme a los artículos 17, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 y 186 de la Ley de Amparo y 32 días inhábiles además de sábados y domingos en el año 2024 para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa), por lo que considerando que por año se tienen considerados 260 días hábiles en promedio, es que se calcula aproximadamente un año y nueve meses para que cause estado una resolución administrativa, por lo que tal plazo se estima para la reserva de la información.

TERCERO.- EN CUANTO AL TIPO DE RESERVA:

Se confirma que sea **Total**, toda vez que es necesario que se otorgue seguridad jurídica y certeza a quienes están sujetos a ellos, por lo que se realizan en beneficio de la sociedad, y el que se reserven las constancias que los integren mientras no se haya emitido la resolución administrativa, se hayan



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

cumplido todas formalidades del debido proceso y que los procedimientos causen estado, lo que otorga esa seguridad pública y certeza de que la información que se haga pública, no podrá ser revocada o modificada.

CUARTO.- ÁREA QUE GENERA LA INFORMACIÓN:

Área de Substanciación y Resolución del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

QUINTO.- FUENTE Y ARCHIVO DONDE RADICA LA INFORMACIÓN:

Área de Substanciación y Resolución del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

SEXTO.- EN CUANTO A LA PRUEBA DE DAÑO:

De conformidad con lo establecido por el artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, se establece que:

“Artículo 112. En la aplicación de la prueba de daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.

III. La limitación se ajusta al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.”

I. Referente al primer supuesto, la prueba de daño para clasificar como reservada la información referida y no proporcionarla al solicitante, se sustenta justamente en el hecho de que **la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable, de perjuicio significativo al interés público**, ya que al proporcionar la información que obra en los documentos solicitados, se pueda provocar afectación del cauce de los procedimientos administrativos o procedimientos judiciales que se relacionan con los anteriores, o de una de las partes que forman parte en dichos procedimientos administrativos. En efecto, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de esa información, supera el interés público, ya que al ser el Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que entre sus atribuciones se encuentran el determinar responsabilidades administrativas, es que al proporcionar la información que obra en los documentos en comento, se estaría en el supuesto de causar un daño y/o perjuicio al desarrollo o cauce legal de los procedimientos de responsabilidades administrativas de que se tratan, señalando que en este caso se está aplicando a la excepción de carácter general en la que se está protegiendo un bien de interés público. Y al clasificar como reservada la información solicitada por el peticionario, evidenciamos que su publicación hará más daño que el beneficio que pudiera representar la divulgación. Es importante también destacar que el

[Handwritten signature]



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

interés público se ve afectado en tanto la publicación de la información dentro de los procedimientos administrativos sancionadores, seguidos conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, como de aquellos seguidos conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que aún no causan firmeza, porque la divulgación de la información solicitada por el peticionario de la información que se deriva de procedimientos administrativos que no han causado firmeza causaría un perjuicio al interés público de publicar las constancias que por estar sub judice son mutables con afectación a la presunción de inocencia y la seguridad jurídica, incumpliendo normas legales que son de orden e interés público.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, toda vez que, por un lado, tenemos el interés público a la información pública, mientras que, por el otro, se encuentra el perjuicio a la imagen de la persona que haya sido sujeta a un procedimiento administrativo y cuyas manifestaciones y estrategias de defensa, así como las actuaciones y determinaciones que lo integren se encuentran sub judice por no haber causado estado, el cual es mayor. En efecto, debe decirse que el interés público a la información pública por ser permanente y continua puede esperar a que se cumplan los supuestos y límites legales para la publicidad de las constancias de los procedimientos administrativos y sus resoluciones, ya que tal espera a que los procedimientos administrativos causen firmeza, otorga seguridad jurídica y certeza a quienes acceden a la información, por lo que se realizan en beneficio de la sociedad, pues la información que se haga pública, no podrá ser revocada o modificada.

Por otro lado, la divulgación de la información solicitada por el peticionario, al publicitarse genera una afectación a la seguridad jurídica procesal, así como a la imagen de la persona sujeta a procedimiento pues prejuzga sobre su inocencia o responsabilidad porque pese a estar sub judice los procedimientos en que está implicado, se hace una publicidad antes de que cause firmeza el estado legal del procedimiento administrativo sobre la que pesa un cuestionamiento legal, y respecto del cual, no existe certidumbre de su permanencia, por lo que si bien, puede quedar sin sanción en caso de obtener una sentencia favorable o en instancias superiores revocar la resolución que impuso una sanción, resulta afectado irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés público de conocer tales procedimientos que permanece con el tiempo y puede esperar una vez que se cumplan los presupuestos legales correspondientes.

III. La limitación se ajusta al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Atendiendo al test de proporcionalidad debe determinarse si la limitación del ejercicio de un derecho fundamental persigue un fin válido, y en el presente caso, tenemos que el derecho a la información previsto en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene límites a la máxima publicidad con respecto a la protección de información privada y datos personales en los términos que fijan las leyes, por lo que el derecho a tal información queda limitada a la protección de la información confidencial y datos personales que fijan las leyes, en el presente caso, los artículos 113, fracción X de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 124, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua,

al limitar el acceso a la información y resoluciones de los procedimientos administrativos sancionadores, hasta el momento en que queden firmes con la finalidad de evitar que se afecte y obstruya su legal conducción.

Debe examinarse si (i) la reserva persigue un fin válido:

En el caso en concreto, la reserva de la información, persigue un fin válido porque establecen un equilibrio entre el derecho a la información pública, con respecto a la intimidad, el honor, la buena imagen y la presunción de inocencia a que tiene derecho todo gobernado, por lo que la información pública que se entregue a los peticionarios de la información corresponde a determinaciones y actuaciones procesales que no pueden modificarse ni impugnarse.

(ii) La reserva como medida resulta idónea para satisfacer su propósito:

Se considera que la restricción de la información pública relativa a las constancias que integran los procedimientos administrativos incluyendo las estrategias defensivas de las partes, hasta que causen estado los procedimientos y las resoluciones emitidas, resulta idónea para satisfacer el derecho al acceso a la información y proteger de manera preventiva los datos personales, y con ello, la intimidad y buena imagen de los servidores públicos hasta que no haya una determinación firme que indique que todas las actuaciones son inamovibles, máxime cuando el propio legislador dispuso posponer la publicidad de la información procesal hasta su firmeza legal.

(iii) El grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado por la reserva:

Se considera que el derecho de acceso a la información de las constancias que integran los procedimientos administrativos incluyendo las estrategias defensivas de las partes, hasta que causen estado los procedimientos y las resoluciones emitidas, es mayor a la difusión inmediata, porque busca salvaguardar la seguridad jurídica de los contenidos procesales hasta su resolución firme, salvaguarda los derechos del servidor público implicado, tales como la presunción de inocencia, el honor, la intimidad y la buena imagen, pues la ciudadanía podría generar un juicio a priori por parte de la sociedad, afectando el prestigio y buen nombre de las personas señaladas como presuntos responsables que están combatiendo la determinación presuntiva de responsabilidad. De igual forma, se sustenta este punto bajo el argumento de que esta medida es temporal, pues para el caso de que los procedimientos administrativos causen firmeza, la información se encontrará en un supuesto legal diverso y a disposición de los gobernados; esto es, la afectación es temporal hasta la firmeza de las actuaciones y constancias procesales.

SÉPTIMO.- EN CUANTO AL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

NOMBRE DEL DOCUMENTO Y/O EXPEDIENTE	TIPO DE RESERVA	INICIO DE RESERVA	RAZONES Y MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN	ÁREA QUE GENERA LA INFORMACIÓN
SAPC-01/2023 SAPC-02/2023 RA-05/2023	TOTAL	27 de agosto de 2024	Por tratarse de información que surge de	Área de Substanciación y Resolución del



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

			constancias procesales dentro de procedimientos administrativos sancionadores que no ha causado estado y eso conlleva una vulneración de la formación y trámite del proceso administrativo, al afectar la seguridad jurídica de los contenidos procesales hasta su resolución firme, los derechos del servidor público implicado, tales como la presunción de inocencia, el honor, la intimidad y la buena imagen.	Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua
--	--	--	--	--

Por todo lo antes mencionado, este Comité de Transparencia del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, emite el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Conforme a los artículos 109, 110, 112 y 124 fracciones IX y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, este Comité de Transparencia del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua manifiesta que la determinación del Órgano Interno de Control de este mismo Sujeto Obligado para la reserva de la información que se pide a través de la solicitud objeto del presente acuerdo y que se describe en el presente documento, cumple a cabalidad con los supuestos legales requeridos en los artículos citados y de sus manifestaciones se acredita la prueba de daño, toda vez que si se divulga dicha información, genera una afectación a la imagen de la persona implicada que prejuzga sobre su inocencia porque pese a estar pendiente de resolverse, o bien en caso de estar sub judice, se hace una publicidad anticipada sobre los procedimientos en los que no existe resolución, y se debe esperar a que cause firmeza el estado legal del procedimiento sobre el que pesa un cuestionamiento legal, y respecto del cual, no existe certidumbre de su permanencia, generando escenarios en los que pueda estar en peligro otro de los derechos de los ciudadanos como lo es la seguridad jurídica, la cual debe garantizarse por este Sujeto Obligado.



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
CHIHUAHUA

SEGUNDO.- Este Comité de Transparencia del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, de conformidad con el artículo 36 fracción III y 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, **CONFIRMA** la determinación de Clasificación de Información que emite el Órgano Interno de Control de este Sujeto Obligado respecto a la solicitud de información con folio 080159324000181, de conformidad con los motivos que se expresan.

TERCERO.- Se **CONFIRMA** que el plazo de reserva sea a partir de la firma del presente acuerdo y hasta por un año nueve meses o bien hasta el término en el que se emita la determinación de que haya causado estado, lo anterior conforme al artículo 113 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

CUARTO.- Con fundamento en lo que dispone el artículo 38 fracciones II y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, remítase el presente acuerdo a la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, para los efectos legales que correspondan, así como también a la Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, para los efectos legales conducentes.

Así, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, lo resolvió por unanimidad de votos de las personas presentes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en la Novena Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de septiembre del año 2024.

MARÍA GUADALUPE DELGADO COTA

Presidenta

PAOLA CONTESTABILE FRAYRE

Secretaria